

SESIONES ORDINARIAS

2001

ORDEN DEL DIA N° 2416

COMISIONES DE LEGISLACION GENERAL Y DE JUSTICIA

Impreso el día 28 de junio de 2001

Término del artículo 113: 10 de julio de 2001

SUMARIO: **Comisión** Nacional de Etica Pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 25.188. Designación de sus representantes para integrar la misma. **Chaya y otros.** (859-D.-2001.)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación General y de Justicia han considerado el proyecto de resolución de la señora diputada Chaya y otros señores diputados, por el que se solicita al Poder Ejecutivo y demás poderes e instituciones pertinentes, la designación de representantes para integrar la Comisión de Etica Pública; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.

Sala de las comisiones, 25 de junio de 2001.

José G. Dumón. – René H. Balestra. – Eduardo R. Di Cola. – Guillermo H. De Sanctis. – Enrique G. Cardesa. – Atilio P. Tazzioli. – María del Carmen Falbo. – Marta E. Biglieri. – Miguel A. Giubergia. – Franco A. Caviglia. – Miguel A. Abella. – Manuel J. Baladrón. – María E. Barbagelata. – Carlos A. Caballero Martín. – Guillermo E. Corfield. – María L. Chaya. – José M. Díaz Bancalari. – Nicolás A. Fernández. – Pablo A. Fontdevila. – Simón F. Hernández. – Roberto I. Lix Klett. – Luis B. Lusquiños. – Benjamín R. Nieto Brizuela. – José A. Recio. – Margarita R. Stolbizer. – Julio A. Tejerina. – Jorge Zapata Mercader.

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Requerir al Poder Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Procuración General de la Nación, la designación de sus representantes para integrar la Comisión Nacional de Etica Pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 25.188.

2. Requerir a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación propongan a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación el nombramiento de un representante por cada órgano, a efectos de integrar la comisión referida en el punto anterior.

3. Requerir al Congreso de la Nación que, a través de sus respectivas Cámaras y teniendo en cuenta lo requerido en el punto 2, efectúe la designación de los ocho ciudadanos que integrarán la referida comisión, y arbitre los mecanismos necesarios para la puesta en marcha de la misma.

María L. Chaya. – Martha C. Alarcia. – Juan C. Ayala. – Ana M. Mosso. – Humberto J. Roggero. – Claudio A. Sebastiani.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación General y de Justicia han considerado el proyecto de resolución de la señora diputada Chaya y otros señores diputados, por el que se solicita al Poder Ejecutivo y demás poderes e instituciones pertinentes, la designación de representantes para integrar la Comisión de Etica Pública, creen innecesario abundar en más

detalles que los expuestos en los fundamentos que lo acompañan por lo que los hacen suyos y así lo expresan.

José G. Dumón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La ley 25.188, de ética en la función pública, sancionada el 29 de septiembre de 1999 y promulgada el 26 de octubre del mismo año, dispone en su artículo 23: "Créase en el ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión Nacional de Ética Pública que funcionará como órgano independiente y actuará con autonomía funcional, en la garantía del cumplimiento de lo normado en la presente ley".

Asimismo, su artículo 24 dispone que dicha comisión "estará integrada por once miembros, ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público, que no podrán pertenecer al órgano, que los designe y que durarán cuatro años en su función pudiendo ser reelegidos por un período.

"Serán designados de la siguiente manera:

"a) Uno por la Corte Suprema de Justicia de la Nación;

"b) Uno por el Poder Ejecutivo de la Nación;

"c) Uno por el procurador general de la Nación;

"d) Ocho ciudadanos que serán designados por resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus miembros presentes, dos de los cuales deberán ser: uno a propuesta del Defensor del Pueblo de la Nación, y el otro a propuesta de la Auditoría General de la Nación."

En cuanto a las funciones de la Comisión Nacional de Ética Pública, el artículo 25 señala textualmente:

"a) Respecto de conductas de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética pública. Las denuncias deberán ser acompañadas de la documentación y todo otro elemento probatorio que las fundamente. La comisión remitirá los antecedentes al organismo competente según la naturaleza del caso, pudiendo recomendar, conforme su gravedad, la suspensión preventiva en la función o en el cargo, y su tratamiento en plazo perentorio;

"b) Recibir las quejas por falta de actuación de los organismos de aplicación, frente a las denuncias ante ellos incoadas, promoviendo en su caso la actualización de los procedimientos de responsabilidad correspondientes;

"c) Redactar el Reglamento de Ética Pública del Congreso de la Nación, según los criterios y principios generales del artículo 2°, los antecedentes nacionales sobre la materia y el aporte de organismos especializados. Dicho cuerpo normativo deberá elevarse al Honorable Congreso de la Nación a efectos de su aprobación mediante resolución conjunta de ambas Cámaras;

"d) Recibir y en su caso exigir de los organismos de aplicación copias de las declaraciones juradas de los funcionarios mencionados en el artículo 5° y conservarlas hasta diez años después del cese en la función;

"e) Garantizar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 10 y 11 de la presente ley y aplicar la sanción prevista en este último;

"f) Registrar con carácter público las sanciones administrativas y judiciales aplicadas por violaciones a la presente ley, las que deberán ser comunicadas por autoridad competente;

"g) Asesorar y evacuar consultas, sin efecto vinculante, en la interpretación de situaciones comprendidas en la presente ley;

"h) Proponer al Congreso de la Nación, dentro de los 120 días de entrada en vigencia de la presente ley, modificaciones a la legislación vigente, destinadas a garantizar la transparencia en el régimen de contrataciones de Estado y a perfeccionar el régimen de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales;

"i) Diseñar y promover programas de capacitación y divulgación del contenido de la presente ley para el personal comprendido en ella;

"j) Requerir colaboración de las distintas dependencias del Estado nacional, dentro de su ámbito de competencia, a fin de obtener los informes necesarios para el desempeño de sus funciones;

"k) Dictar su propio reglamento y elegir sus autoridades;

"l) Elaborar un informe anual, de carácter público, dando cuenta de su labor, debiendo asegurar su difusión;

"m) Requerir, cuando lo considere pertinente, la presentación de las correspondientes declaraciones juradas a los sujetos comprendidos en el artículo 5°, inciso v), de la presente ley."

Habiendo transcurrido casi un año y medio desde la promulgación de la ley, la puesta en marcha de este importante organismo de contralor continúa estancada, no obstante que uno de los pilares de campaña del actual gobierno ha sido precisamente garantizar la transparencia de sus actos y de sus funcionarios, así como combatir la corrupción en todos sus frentes.

A ello se suma la creación de la Oficina Anticorrupción, que a pesar de los cuestionamientos recibidos desde diferentes sectores, ha contado con un importante apoyo político por parte del gobierno nacional, habiendo generado sus intervenciones un notorio impacto mediático.

Este organismo, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, se encuentra regulado por el decreto 102/99 del Poder Ejecutivo, que en su artículo 2° detalla sus competencias y funciones.

Algunas atribuciones referidas a la conducta de los funcionarios públicos se superponen con las que la ley vigente pone en cabeza de la Comisión Nacional de Ética Pública, lo cual provoca que el funcionamiento de esta comisión quede desvirtuado.

Ello permite concluir que a través de un decreto del Poder Ejecutivo se modifica una ley de la Nación, lo cual resulta claramente violatorio del principio republicano de separación de poderes consagrado por nuestra Constitución Nacional.

Por otra parte se pretende que un órgano que funciona en la órbita de un ministerio sea el que controle los actos de los funcionarios, lo cual resulta a todas luces un contrasentido.

En virtud de ello, entendemos que el único modo de garantizar la transparencia en el manejo de la función pública es propugnar el cumplimiento de la Ley de Ética Pública, poniendo la conducta de los agentes públicos bajo la órbita del órgano creado por dicha norma, con representación de los diferentes sectores políticos y con suficiente autonomía funcional.

Por todo lo expuesto solicito al señor presidente la aprobación del presente proyecto.

*María L. Chaya. – Martha C. Alarcía. –
Juan C. Ayala. – Ana M. Mosso. –
Humberto J. Roggero. – Claudio A.
Sebastiani.*